



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 7195 / 2025 - AML

Autos: "GILLIG ALEJANDRO ERNESTO c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 7195/2025

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, por la que no se hizo a la impugnación presentada contra las Actas de Inspección e Infracción y confirmó la deuda y multa determinada, conforme los términos expuestos en el dictamen que antecede.

Dispuso asimismo su notificación al interesado, haciéndole saber que en caso de disconformidad con el pronunciamiento debía presentar recurso de apelación, cuya admisión quedará sujeta al depósito del importe de la deuda que en definitiva se establezca, por aplicación de los regímenes de actualización e intereses que correspondieren (decreto 589/91, decreto 611/92, decreto 1266/92, resolución 22/91 SIP, resolución 39/93 SIP, resolución 459/96 M.E.O. y S.P, Resolución N° 110/02 ME, Resolución N° 36/03 M.E, Resolución N° 314/04 M.E y O. (modif. por Resoluciones M.E y P N° 578/04 Y 492/06), el que deberá hacerse efectivo dentro del mismo plazo en que dicho recurso puede interponerse, 30 o 45 días según el apelante se domicilie en C.A.B.A. o el interior del país (art. 9 ley 23.473 sustituido por artículo 14 ley 26.063, art. 15 ley 18.820 y art. 39 bis inc. b), decreto 1285/58 modif, por art. 26 ley 24.463).

Así las cosas, la recurrente interpuso recurso de apelación, sin dar cumplimiento a la carga de orden formal a que hace referencia el art. 15 de la ley 18.820.

II.- Así, corresponde señalar que el art.15 de la ley 18.820 (modificado por ley 23.473) expresamente dispone que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso", y el art. 39 bis del decreto ley 1285/58 modificado por el art. 26 de la ley 24.463 dispone que deberá depositarse el importe resultante de la resolución impugnada.

Con relación a las disposiciones de diferentes leyes que supedita la concesión del recurso a que previamente se pague el importe pertinente, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene declarado que no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que



aquella reviste desproporcionada magnitud con relación a la concreta capacidad económica del recurrente.

Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, (ver fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753). En síntesis, dentro de este orden de ideas, es dable señalar que el Más Alto Tribunal de la Nación ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplen situaciones patrimoniales concretas de los afectados a fin de evitar que aquel pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto de evitar que las excepciones desvirtúen la aplicación del principio general, que lo que ha de valorarse para eximir el pago inmediato en supuestos de multa no son las dificultades de su oblación derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de los negocios de la demandada, sino que a través de ella, se verifique un importante desapoderamiento de bienes de la demandada. (doctrina de Fallos 247:181; 205:20), o una desproporcionada magnitud entre el monto a depositar en relación a la capacidad económica del apelante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones ( Fallos 256:38; 261:101).

Ello así, quien pretende eximirse del pago exigido por las normas en cuestión debe aportar acabada y fehaciente prueba acerca que se encuentra alcanzado por alguna de las hipótesis de excepción de creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con relación a ello, se observa que el apelante ofrece la prueba descripta en el acápite 1) tendiente a demostrar que no puede abonar la suma reclamada en la determinación de deuda. Dicha documentación, carece de una explicación razonada del modo en que el contador ha llegado a esas conclusiones y no detalla los registros contables sobre los que se ha emitido el dictamen (C.S.J.N, “Don Reynaldo S.C.A. c/ Dirección General Impositiva”, 23 de febrero de 1999). Que, en tales condiciones, no se encuentra acreditado el cumplimiento del recaudo excepcional citado, pues los datos suministrados en el certificado del contador resultan insuficientes para considerar configurada la situación fáctica sobre la que se sustentó el pedido efectuado. En igual





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

sentido se ha expedido esta Sala en autos “Teza, Oscar Hugo c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de deuda”, sentencia definitiva Nº 132146/2010 del 17 de marzo de 2010.

Por lo expuesto, atento a que la recurrente no prueba de modo efectivo y concreto hallarse comprendido en las situaciones de salvedad previstas para supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, (conforme la doctrina del Alto Tribunal citada precedentemente), corresponde declarar desierto el remedio procesal intentado.

III) Dado el resultado alcanzado, y la particularidad de la temática abordada, que pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: I- Declarar desierto el recurso interpuesto; II- Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública –dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.

